

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	AURA PATRICIA RUÍZ POSADA
DEMANDADO	AFP PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-021-2020-00230-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes por muerte de afiliada, dependencia económica de la madre respecto a la hija fallecida.
DECISIÓN	Confirma.

*Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **AURA PATRICIA RUÍZ POSADA** contra la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A..**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 038**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ANTECEDENTES**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia absolutoria que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 28 de julio de 2021, dentro del proceso referenciado.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA era madre de la señora DANIELA VÉLEZ RUÍZ, quien falleció el día 27 de julio de 2019, por causas de origen común, y se encontraba afiliada al sistema general de pensiones a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde registraba un total de 317,43 semanas, de las cuales 127 semanas se cotizaron en los 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Que, al momento del fallecimiento, la afiliada DANIELA VÉLEZ RUÍZ era soltera, sin hijos y vivía con su madre y sus dos hermanos (MARÍA ALEJANDRA y DIEGO VÉLEZ RUÍZ), pues su padre DIEGO LEÓN VÉLEZ ARANGO había fallecido desde el 18 de marzo de 2016, quien dejó causada una pensión de sobrevivientes en cuantía mínima a favor de la demandante AURA PATRICIA RUÍZ POSADA y del hijo menor DIEGO VÉLEZ RUÍZ y a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Narra la parte activa que, con ocasión al fallecimiento de la afiliada DANIELA VÉLEZ RUÍZ, la aquí demandante elevó solicitud pensional ante la AFP PROTECCIÓN S.A., pero dicho fondo, mediante comunicado del 6 de diciembre de 2019, decidió negar la prestación económica deprecada, de manera abrupta e injustificada, desconociendo su propia investigación administrativa, misma que permitía inferir que la demandante si era la legítima beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada, al estar acreditado el requisito legal de la dependencia económica de la madre respecto de la hija fallecida.

Aduce el escrito introductorio, que es desafortunada la conclusión a la que arribó la AFP accionada, indicando que, si bien el sostenimiento económico del hogar era compartido entre la demandante y sus dos hijas (MARÍA ALEJANDRA y DANIELA VÉLEZ RUÍZ), era la causante quien más aportaba al sostenimiento de su núcleo familiar, con el fruto de sus ingresos como trabajadora dependiente al servicio de la empresa “FORZA OUTSORCING S.A.S.”, y de un emprendimiento personal de repostería denominado “EL SABOR ENCANTADO” actividad que realizaba durante sus horas libres y fines de semana a través de redes sociales (Instagram).

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que a la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA le asiste derecho a una pensión de sobrevivientes de origen común en calidad de madre del afiliada fallecida DANIELA VÉLEZ RUÍZ, en consecuencia, se CONDENE a la AFP PROTECCIÓN S.A., al reconocimiento y pago de esta prestación económica, en forma retroactiva a partir del 27 de julio de 2019, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

La AFP PROTECCION S.A., dio respuesta oportuna a través de su apoderado judicial, según consta en el archivo PDF N° 8 incorporado al expediente digital, aceptando como ciertos los hechos relativos a la afiliación de la señora DANIELA VÉLEZ RUÍZ, el numero de semanas cotizadas, el fallecimiento ocurrido el 27 de julio de 2019, la solicitud pensional presentada por la demandante con ocasión a este insuceso, y la respuesta negativa que le fue suministrada por la no acreditación del requisito legal de la dependencia económica, conforme a las conclusiones derivadas de la investigación administrativa realizada por la firma VALUATIVE S.A.S., sin que le consten los restantes supuestos fácticos narrados por la parte activa, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio; se opuso a la prosperidad de todas y cada una

de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; COBRO DE LO NO DEBIDO; COMPENSACIÓN; BUENA FE; y PRESCRIPCIÓN”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En el fallo objeto de apelación, la juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 28 de julio de 2021, DECLARÓ probada la excepción de “NO ACREDITACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA, COMO REQUISITO PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA”, en consecuencia, ABSOLVIÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A., de todas y cada una de las pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA, a quien le fueron impuestas las costas del proceso en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma equivalente a ½ SMLMV.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que la causación del derecho pensional como tal no genera controversia, pues la afiliada fallecida contaba con 127 semanas cotizadas, en los 3 años anteriores a la fecha de su fallecimiento.

No obstante, la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA no logró probar el requisito de la dependencia económica respecto de su hija fallecida, toda vez que al interior del debate probatorio se presentaron varias contradicciones entre los testigos, quedando en evidencia que la demandante trató de manipular la prueba testimonial para convencer al despacho acerca del cumplimiento del requisito legal de la dependencia económica, hasta el punto de afirmar que su otra hija MARÍA ALEJANDRA no vivía con ella para la fecha de fallecimiento de la causante, y que tenía sus propias obligaciones, a sabiendas que la firma investigadora contratada por la AFP accionada logró verificar durante la investigación administrativa que la hermana de la causante también vivía en el mismo núcleo familiar de la demandante RUÍZ POSADA.

De otro lado, señaló la funcionaria judicial de primer grado que, de la prueba documental allegada al proceso, se pudo constatar que la causante tenía una obligación crediticia de aproximadamente \$1.400.000 mensuales, y,

dado que su salario era de \$1.600.000 mensuales, era muy poco con lo que podía ayudar con el sostenimiento económico de su señora madre.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

**APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE:** su apoderado judicial dice no estar de acuerdo con la no acreditación del requisito legal de la dependencia económica, y que contrario a los razonamientos expuestos por el A Quo, la demandante si logro probar el referido requisito legal respecto a su hija fallecida.

Acusa la sentencia de primer grado de una indebida valoración probatoria, pues en su sentir se omitió realizar una valoración conjunta de la prueba, entre las cuales cobraba mayor relevancia lo manifestado por los testigos PAMELA GUERRA BURITICA y VIVIANA MARÍA VÉLEZ VÁSQUEZ, quienes supieron explicar en qué consistía la dependencia económica de la demandante, respecto de su hija fallecida.

Afirma, que las deudas que tenía la causante, eran las normales de cualquier persona, mas no se trataba de un escandaloso monto, como lo quiso hacer ver la AFP accionada; que, además, la demandante no tenía por qué tener conocimiento de que deudas tenía su hija, pues esta era una situación personal de la afiliada fallecida.

Que la otra hija de la demandante no podía ayudarle mucho a la demandante en términos económicos, pues debía sostener su propio hogar, ya que su esposo era muy irresponsable, según lo declararon los testigos.

Motivos por los cuales solicita la revocatoria total de la providencia impugnada, y en su lugar se acojan todas y cada una de las pretensiones formuladas.

### **Alegatos de conclusión.**

Los apoderados judiciales de las partes, aprovecharon la oportunidad procesal para presentar sus alegatos de segunda instancia.

El apoderado judicial de la demandante, expone que los argumentos vertidos a lo largo de la providencia atacada, no se estiman los más afortunados, no sólo por la forma inquisitiva, intrigante e insidiosa con que se evidencia, se efectuaron por parte del juez los interrogatorios, tanto de parte, como de los testigos; quien lo creyera por parte del primer llamado a imprimir tranquilidad y serenidad a las deponencias, se insiste, el director del proceso, aspectos éstos que aunque de carácter subjetivo ostentaron en el de marras una incidencia notoria en la determinación apelada; sino principalmente, porque la lectura que se hizo de la prueba allegada dentro de la respectiva exposición motiva de la providencia en verdad no guarda relación con los postulados que establece el art. 61 del CPL y de la SS, esto es, atendiendo a los principios científicos de la prueba (máximas de la experiencia), a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal de las partes.

Que al analizarse detalladamente y en conjunto la prueba testimonial, pero sobre todo la documental echada a menos dentro de la sentencia impugnada, a las claras se evidencia una situación contraria a lo que concluyó el juzgado de primer grado, pues a lo largo de las diligencias quedó suficientemente acreditado que aunque la afiliada fallecida tenía un trabajo formal en una empresa donde devengaba una suma que no le permitía una gran holgura económica, aquel se complementa con un ingreso adicional, permanente en el tiempo, cuya existencia está acreditada -no solo testimonial, sino documentalmente- y de un importante quantum, que le permitían obtener la mentada holgura, lo que incluía por supuesto la ayuda constante, necesaria y congrua para la subsistencia de su progenitora y hoy demandante, la señora Ruiz Posada.

Por su parte el apoderado judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., solicita la confirmación total de lo resuelto por el juez de primer grado, al estimar la sentencia de primer grado justada a derecho y a las pruebas allegadas al plenario.

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.** -Pensión de sobrevivientes por muerte de afiliado, dependencia económica de la madre respecto del afiliado fallecido. Teniendo en cuenta el recurso de apelación impetrado, el cual delimita la competencia de la Sala en la segunda instancia, la controversia jurídica que debe resolverse, consiste en determinar, si la aquí demandante AURA PATRICIA RUÍZ POSADA acredita los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclama con ocasión al fallecimiento de su hija afiliada DANIELA VÉLEZ RUÍZ.

Procede la Sala a resolver lo pertinente dentro de su competencia, advirtiendo que para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son las contenidas en el artículo 13 de la Ley 797 de 1993, en lo referente a los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

*-El fallecimiento de la afiliada DANIELA VÉLEZ RUÍZ hecho ocurrido día 27 de julio de 2019, según consta en el registro civil de defunción contenidos a folios 21 del archivo PDF N° 2.*

*-La filiación entre las señoras AURA PATRICIA RUÍZ POSADA y DANIELA VÉLEZ RUÍZ según consta en el registro civil de nacimiento visible a folios 19 del archivo PDF N° 2.*

*-El cargo y último salario de la afiliada fallecida, según certificación laboral expedida por la empresa "FORZA OUTSORCING", donde se hace saber que la joven DANIELA VÉLEZ RUÍZ laboró como Supervisora entre el 2 de mayo de 2018 y el 26 de julio de 2019, con una asignación básica mensual de \$1.500.000 (fls. 23 del archivo PDF N° 2).*

*-La afiliación de la joven DANIELA VÉLEZ RUÍZ a la AFP PROTECCIÓN S.A., fondo privado de pensiones donde registraba un total de 317,43 semanas cotizadas, de las cuales 123,71 semanas lo estaban dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso, según consta en el certificado visible a folios 24 del archivo PDF N° 2.*

*- La presentación de una solicitud pensional ante la AFP PROTECCIÓN S.A. por parte de la demandante actuando en calidad de madre supérstite., prestación que le fue negada mediante comunicado del 6 de diciembre de 2019, bajo el argumento de no haberse acreditado el requisito legal de la dependencia económica, conforme la investigación administrativa contratada con la firma "VALUATIVE S.A.S." (fls. 63 al 66 del archivo PDF 02).*

*-Y finalmente está probado que la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA, percibe una pensión de sobrevivientes a cargo de PROTECCION S.A., calidad de cónyuge supérstite del afiliado fallecido DIEGO LEÓN VELEZ ARANGO a partir del 18 de marzo de 2016, en cuantía mínima, y compartía en parte iguales con un hijo menor y/o estudiante DIEGO VÉLEZ RUÍZ.*

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar si en el sub examine quedó satisfecho o no el requisito de la dependencia económica de la madre AURA PATRICIA RUÍZ POSADA frente a la hija fallecida DANIELA VÉLEZ RUÍZ, conforme lo previsto en el literal d) del artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, normativa que establece lo siguiente: *"a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste".*



## **LA DEPENDENCIA ECONÓMICA EN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN FAVOR DE PADRES, POR HIJO FALLECIDO.**

Frente al alcance de la dependencia económica, se tiene que la modificación traída por la Ley 797 de 2003, que establecía que la dependencia económica de padres a hijos debía ser total y absoluta, fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-111 de 2006.

La ausencia de una definición legal de la dependencia económica, determinó la necesidad de fijar su alcance por vía jurisprudencial; en este contexto, la jurisprudencia ha identificado un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente a partir de la valoración del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, lo que ha llevado a concluir que la dependencia no se desvirtúa por el hecho que los padres perciban ingresos por su propio trabajo o recursos de otras fuentes, siempre y cuando éstos no los conviertan en autosuficientes. Así ha quedado expuesto entre otras, en la sentencia T-456 de 2011 que fija reglas para determinar la dependencia económica.

En conclusión, depender económicamente de alguien, supone un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio recibido de tal manera útil e imprescindible que, de no obtenerlo, se pondría en peligro la subsistencia del subordinado al no poder sufragar los gastos diarios.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, ha reseñado respecto a la dependencia económica de los padres, en sentencia con radicación No. 25.069 de 2.006 lo siguiente:

*“Este criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que sólo puede ser definida en cada caso concreto”.*

En materia de pensión de sobrevivientes, ha estimado la jurisprudencia del trabajo que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas. Así lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como puede verse entre otras, en la sentencia del 24 de noviembre de 2009, con radicado 36.026, en la cual dejó sentado que:

*“Es importante precisar que a la demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, es a la que, en principio, le corresponde probar, por cualquier medio de los legalmente autorizados, su dependencia económica del occiso, y cumplido lo anterior, será el demandado quien deberá demostrar dentro de la contienda judicial, la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que le permitan ser autosuficiente.”*

Y en la sentencia SL15260 de 2017, rad. 56784, La Corte reiteró lo siguiente:

*“...La dependencia económica que conforme el criterio jurisprudencial de esta Sala, posibilita el acceso a una pensión de sobrevivientes, debe contar, por lo menos, con tres elementos a saber: que sea cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; que la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario; y que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste, por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de suerte que si recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia...”*

Conforme al criterio jurisprudencial que antecede, resulta claro para la Sala que la entidad de la ayuda económica por la que se reclame la calidad de beneficios padre-hijo en una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, no se encuentra determinada tanto por el quantum de la misma, sino por la

importancia y determinación que esta pueda tener en determinado contexto socio económico familiar.

**CASO CONCRETO.**

Ahora bien, adentrándose en el análisis de las razones que motivaron la negativa pensional por parte de la juez de primer grado, se encuentra que ésta obedeció a que la situación económica de la causante DANIELA VÉLEZ RUÍZ para el mes de julio de 2019, no era la mejor, pues sus obligaciones bancarias y crediticias igualaban prácticamente sus ingresos laborales, por lo que le era imposible asumir el sostenimiento económico de la demandante en los términos anunciados en la demanda; lo anterior, aunado a las contradicciones en las que incurrieron las dos testigos presentadas por la parte demandante, en relación a la conformación del núcleo familiar de la señora RUÍZ POSADA, y que le restaron credibilidad a las afirmaciones de la parte demandante.

Resalta la Sala, que a igual conclusión arribó la AFP accionada durante el trámite de la investigación administrativa que se surtió con ocasión al fallecimiento de la afiliada a través de la firma “VALUATIVE S.A.S.”, según se observa a folios 14 y ss del archivo PDF N° 09, donde se consignó la siguiente conclusión, veamos:

9. CONCLUSIÓN FINAL
Mediante las entrevistas efectuadas a familiares, amigos y vecinos, se estableció que DANIELA VELEZ RUIZ, era de estado civil soltera, no había establecido unión marital de hecho ni matrimonio, no tenía hijos reconocidos o por reconocer. Así mismo se conoce que fallece de manera violenta al caer por el balcón de la residencia de su novio.
Las labores de verificación y consultas efectuadas permiten establecer que la señora DANIELA, si contribuía con un monto de dinero al hogar donde residía en compañía de su madre y hermanos, sin embargo, NO se obtuvieron soportes que permitieras establecer la cuantía y constancia de la entrega del aporte.
Así mismo se conoció que tanto la afiliada como la reclamante, presentan obligaciones financieras que incrementan sus egresos reportados en la tabla de dependencia economica, por lo cual se evidencian ciertas inconsistencias en la declaración brindada por la reclamante, toda vez que niega que tanto ella como su hija fallecida, tuviesen deudas, las cuales para la afiliada ascienden a un valor mensual de \$1.348.000 (antes del fallecimiento) y para la reclamante por valor de \$ 353.000 (actualmente), demostrando así que la afiliada a través de su sueldo aproximado de \$1.500.000 a \$1.600.000, no le era posible efectuar el aporte mensual manifestó su progenitora al hogar por valor de \$800.000, de igual manera no es viable que la reclamante aportara todo su ingreso económico (media mesada pensional por sobrevivencia) por valor de \$364.000 al hogar, dado que a la fecha a respondido con todas sus finanzas encontrándose al día.

De otro lado, y al interior de este proceso judicial, la prueba recaudada tendiente a la demostración del requisito de la dependencia económica frente al hijo fallecido, se circunscribió a la testimonial de las señoras PAMELA GUERRA BURITICA y LEIDY VIVIANA BRICEÑO, quienes le relataron al despacho que conocen a la demandante AURA PATRICIA RUÍZ POSADA y su núcleo familiar desde de toda la vida, la primera porque fue amiga desde la infancia de la causante DANIELA VÉLEZ RUÍZ, y la segunda porque se encuentra casada con un hermano de la demandante, quien a su vez es tío de la causante, y que por tal razón puede dar fe de las condiciones familiares y socioeconómicas de la demandante para el mes de julio de 2019.

La testigo PAMELA GUERRA BURITICA, refiere conocer a la causante de toda la vida, porque sus padres entablaron amistad cuando ellas se encontraban aun en la temprana infancia, en el municipio de Valencia - Córdoba, pues el padre de la causante era administrador de una finca en esa municipalidad.

Relató esta testigo que, para el momento del fallecimiento de la causante, la demandante vivía con dos de sus tres hijos Daniela y Diego, pues la tercera hija de nombre María Alejandra, vivía por fuera, estaba casada, y trabajaba en otro municipio, como ingeniera en el Túnel del Toyo.

Que la joven Daniela era la principal proveedora de las necesidades del hogar, pues asumió esta responsabilidad desde que ocurrió el fallecimiento del papa (Diego León Vélez), circunstancia que refiere constarle porque siempre fueron amigas.

Señaló que al momento del fallecimiento, la causante devengaba un salario mensual de entre \$1.500.000 y \$1.600.000, y a parte de este ingreso salarial, también tenía un emprendimiento de repostería denominado “el sabor encantado”, actividad que le generaba unos ingresos fijos mensuales de entre \$900.0000 y \$1.000.000, y que esto último lo sabe porque varias veces la acompañó a ferias o eventos donde se comercializaban tales productos, y que era la demandante quien le ayudaba con la preparación de los postres.

Respecto a la otra hermana de la causante (María Alejandra), manifestó que estaba casada con un médico, quien laboraba al servicio del proyecto hidroituango, y que María Alejandra debía que asumir muchos de los gastos del hogar conformado con el esposo, ya que estaba muy mal casada, y pues su esposo no aportaba para asumir las obligaciones contraídas durante el matrimonio.

Que no sabe si su amiga Daniela tenía compromisos financieros, o estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de “Peculado”, pero que la situación económica de la demandante sí empeoró con la muerte de Daniela, pues dejó de percibir unos recursos económicos destinados a sufragar gastos de alimentación y servicios públicos.

Le relató al despacho que la causante Daniela Vélez Ruíz debía cumplir un horario de trabajo en la empresa donde trabajaba para el momento del fallecimiento, y en ocasiones debía realizar desplazarse a otros municipios para atender asuntos del trabajo.

Que el emprendimiento de repostería inició en el año 2016, buscando ingresos adicionales, luego del fallecimiento del padre de la causante y esposo de la demandante, el cual fue exitoso pues tenía buena clientela, y era publicitado a través de la red social “Instagram”.

Afirmó que la joven Daniela le entregaba a la demandante una suma dineraria mensual de aproximadamente \$800.000 o \$900.000 mil pesos, para su sostenimiento, y que esto lo sabe y le consta porque en varias ocasiones acompañó a la causante a retirar estos dineros del banco y a entregárselos a la señora Aura Patricia Ruiz Posada.

Finalmente relató esta testigo que, para el momento del fallecimiento de la causante, la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA solo percibía media pensión por la muerte del esposo, y de ahí apoyaba el estudio de su hijo Diego, y que en la actualidad la demandante vive con sus hijos y María Alejandra, y que esta última llegó a apoyar el sostenimiento del hogar.

A su turno la testigo VIVIANA MARÍA VÉLEZ VÁSQUEZ: refirió estar casada con un hermano de la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA, quien a su vez era tío de la joven DANIELA VÉLEZ RUÍZ quien falleció el día 27 de julio de 2019.

Que al momento del fallecimiento la joven Daniela vivía con la mama y los dos hermanos (María Alejandra y Diego), y que la casa donde viven es propia, pero no sabe si así lo era para el mes de julio de 2019.

Indica que la demandante siempre fue ama de casa, pero al momento de fallecer el esposo en el año 2016, tanto la demandante como la joven Daniela comenzaron un emprendimiento de repostería, el cual se encontraba vigente para el mes de julio de 2019, pues el negocio había cogido más fuerza, y era contratadas para atender eventos y fiestas.

La causante también trabajó en la empresa Forza, en el municipio de Betulia – Ant., y en un hotel, desempeñado labores administrativas.

Señala que, para el mes de julio de 2019, la joven Daniela, era empleada de la empresa Forza cumpliendo un horario de trabajo y devengando un salario mensual de \$1.500.000, pero en los tiempos libres y fines de semana se dedicaba al emprendimiento de postres, del cual percibía unos ingresos mensuales que oscilaban entre 1 millón y 1.5 millones, aclarando que no tiene conocimiento si esta suma era la utilidad de la operación, o simplemente el ingreso bruto recaudado por la venta de los productos.

Que Daniela colaboraba con los gastos del hogar, con una suma mensual de \$800.000 mensuales que le eran entregados a la demandante AURA PATRICIA RUÍZ POSADA.

Manifestó esta deponente, que la otra hija de la demandante se llama Alejandra y trabajaba para el mes de julio de 2019 en el proyecto hidroituango lugar donde también residía, pero un mes antes del fallecimiento de Daniela regresó a vivir con la demandante y hermanos.

Que Alejandra es ingeniera civil, y trabaja con la empresa conconcreto, era casada, y era la que le tocaba asumir en mayor medida los gastos de su propio hogar, y solamente le daba a la mama una “blusa” de vez en cuando, hecho del que dice tener conocimiento por comentarios que le hiciere la propia demandante.

Que la demandante percibe media pensión de la muerte del esposo, y que era este último quien la sostenía económicamente, luego los ingresos provinieron de la pensión y comenzaron con el emprendimiento de Daniela, quien recibía el producto de las ventas de repostería

Relató esta testigo que la causante también llegó a trabajar en una cooperativa de café, fue empleada del el Municipio de Betulia – Ant., laboró para un hotel, y su ultimo empleo fue con la empresa Forza; que en el Municipio de Betulia – Ant., laboró entre los años 2016 y 2018, y también se domicilió en dicho municipio.

Dice no tener conocimiento si la joven Daniela tenía una investigación penal luego de haber sido empleada pública del Municipio de Betulia – Ant., o si formalizó su emprendimiento de repostería ante la Cámara de Comercio, y que en todo caso el emprendimiento culmino con el fallecimiento de la joven Daniela.

También se practicó el interrogatorio de parte a la demandante AURA PATRICIA RUÍZ POSADA, quien le manifestó a la juez de primer grado que su núcleo familiar para el mes de julio de 2019, estaba compuesto por sus dos hijos solteros Daniela y Diego, ya que su otra hija María Alejandra vivía en el Municipio de Cañas Gordas, pues trabajaba en la obra de infraestructura vial denominada “Túnel del Toyo”.

Que su hija Daniela aportaba 800.000 mensuales, y además de ello asumía otros gastos, como por ejemplo comprarle un vestido o pagar su factura de telefonía celular, pues su otra hija MARÍA ALEJANDRA estaba casada, y había contraído deudas con el esposo, entonces no podía contar con ella para un aporte fijo, le daba una suma diferente cada mes, de acuerdo a lo que podía.

Que en la actualidad la hija María Alejandra se encuentra separada del esposo y vive con ella, para la fecha en que falleció Daniela ya tenían dos meses de separados de cuerpos, aun no se han podido divorciado legalmente.

Respecto al salario de sus hijas, manifestó que María Alejandra para el 2019, recibía un salario de \$2.800.000 mensuales, pero debía destinarlo a las deudas que había contraído con el esposo, mientras que el salario de la causante para ese mismo año 2019 era de \$1.600.000.

Que los gastos del hogar para el año 2019, era un valor aproximado de \$1.400.000, entre los cuales no se encontraba el rubro de arrendamiento pues la casa donde vivían está a nombre de la demandante.

Al preguntarle por la situación económica de la causante, le manifestó al despacho que su hija Daniela sí tenía deudas, pero, aun así, destinaba de sus ingresos un aproximado mensual de \$800.000, pues aparte del salario también esta hija también percibía unos recursos del emprendimiento de repostería, mismo que le posibilitaba pagar sus deudas y ayudarse con sus cosas.

Que, al momento de la investigación administrativa adelantada por la firma contratada por la AFP privada, ella no sabía nada de las deudas de la hija Daniela, y el investigador que la entrevistó tampoco le preguntó si Daniela tenía otros ingresos no salariales.

También le reveló al despacho que la causante antes de trabajar para la empresa “Forza Outsourcing”, laboró en una cooperativa de café, y en la empresa de servicios públicos de Betulia – Ant., como funcionaria pública, por lo cual estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de peculado.

Que su hija Daniela murió a causa de un suicidio, pues esta venía con unos problemas depresivos desde hacía aproximadamente 10 años, tiempo durante el cual había recibido tratamientos psicológicos y psiquiátricos, e igualmente se encontraba luchando con un cáncer de colon, y la tenía muy



afectada la muerte del papa en el año 2016, circunstancias familiares y personales que no fueron preguntadas por el investigador, pues este solo se limitó a indagar sobre el aspecto económico.

Aceptó su calidad de pensionada en calidad de cónyuge supérstite, y que en actualidad percibe el 100% de la pensión, pues su hijo ya se graduó de los estudios.

Finalmente narró la demandante que, para el mes de julio de 2019, su otra hija María Alejandra ya había renunciado al proyecto de infraestructura vial “TÚNEL DEL TOYO” y estaba trabajando con la empresa Concreto, pero desconoce el salario.

Pues bien, el examen conjunto de la prueba bajo las reglas de la sana crítica y la experiencia, dan cuenta que el núcleo familiar al que pertenecía la causante DANIELA VÉLEZ RUÍZ era una familia compuesta por madre (Aura Patricia Ruiz Posada) y dos hermanos (María Alejandra y Diego Vélez Ruiz), lo que implicaba unos elevados gastos para el sostenimiento común de todos sus integrantes.

Sin embargo, todos los miembros de este núcleo familiar tenían ingresos fijos, la demandante AURA PATRICIA y el joven DIEGO, compartían en partes iguales una pensión de sobrevivientes en cuantía mínima, y las hijas Daniela y María Alejandra, percibían un salario fijo mensual como trabajadoras dependientes.

Coligiendo la Sala que a excepción del joven Diego Vélez Ruiz (mesada con destinación específica) tanto la demandante, como las hijas Daniela y María Alejandra lo que hacían era contribuir a un fondo común del que se beneficiaban todos y cada uno de los miembros de ese hogar, pero de manera alguna se logró probar en este juicio que la causante Daniela Vélez Ruiz destinara parte de su salario exclusivamente al sostenimiento económico de su señora madre la aquí demandante AURA PATRICIA RUÍZ POSADA, y mucho menos una suma de \$800.000, es decir, un poco más de mitad de su asignación salarial para el año 2019 (\$1.500.000), conforme la certificación

laboral expedida por el empleador “FORZA OUTSORCING”, según consta a folios 23 del archivo PDF N° 2.

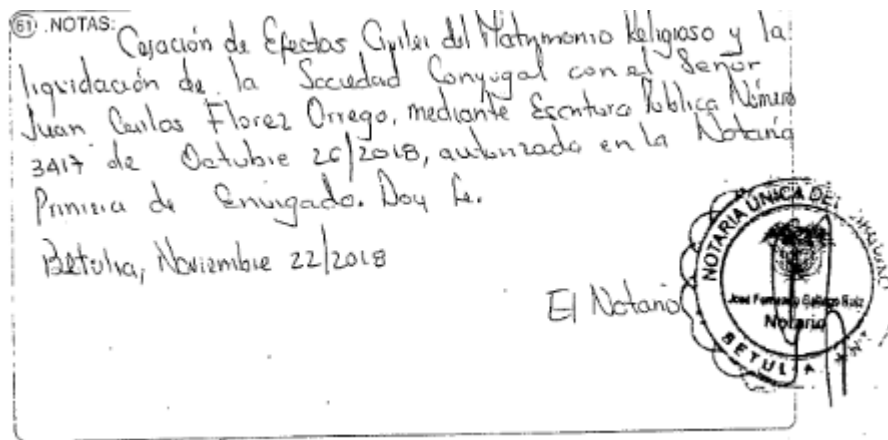
Estimando esta colegiatura que el referido aporte mensual de \$800.000, que según la demandante le era entregado por su hija Daniela Vélez Ruíz, era prácticamente una cifra imposible de cumplir si se tiene en cuenta las obligaciones crediticias que tenía la causante para el mes de julio de 2019 y que rondaban la cifra mensual de \$1.348.000.

Y si bien se anunció en la demanda y la prueba testimonial la existencia de otros ingresos adicionales no salariales de la causante Daniela Vélez Ruíz, producto de un emprendimiento familiar denominado “EL SABOR ENCANTADO” relacionado con la elaboración de postres y demás productos de repostería publicitados y comercializados a través de redes sociales, no se aportó ningún documento, factura, extracto bancario, o transacción bancaria, que diera cuenta de los ingresos que percibía la causante por esta actividad comercial, que alternamente ejecutaba, y muchos menos se acreditó cuanto era la utilidad neta que le quedaba a la causante luego de deducir los gastos de producción y distribución de los productos, pues así se evidenció en la declaración rendida por la testigo VIVIANA MARÍA VÉLEZ VÁSQUEZ quien le afirmó al juez de primer grado que su sobrina política Daniela Vélez Ruiz recibía entre \$1.000.000 y \$1.500.000 mensuales producto de su negocio en redes sociales, pero que no sabía si ese dinero eran ventas brutas o ganancia neta.

También observa la Sala, que la actora trató de restarle importancia al aporte económico que realizaba su otra hija María Alejandra, pues al inicio de la declaración manifestó que esta hija vivía aparte en el Municipio de Cañas Gordas, estaba casada, y debía atender las obligaciones crediticias que había contraído durante su vínculo matrimonial.

Y luego durante el desarrollo del interrogatorio de parte, le manifestó al despacho que un mes y medio antes del fallecimiento de la causante, la hija María Alejandra se había separado de cuerpos del esposo, pero sin divorciarse, y había retornado a la casa materna.

Sin embargo, dentro de la prueba documental aportada por las partes, obra el registro civil de nacimiento de la hija María Alejandra Vélez Ruiz, el cual contiene en su reverso una nota marginal, donde se anuncia la existencia de un vínculo matrimonial con el señor Juan Carlos Flórez Urrego, pero también se anuncia la cesación de efectos civiles del referido matrimonio y liquidación de sociedad conyugal mediante escritura pública del 26 de octubre de 2018, veamos:



No resultando así cierto lo manifestado por la demandante y los testigos, en cuanto que la hija María Alejandra apenas se estaba separando de esposo para el mes de julio de 2019, pues para ese momento ya habían transcurrido 9 meses desde que se adelantó el trámite notarial asentado como nota marginal en el registro civil de nacimiento, y si bien tal circunstancia no es demostrativa que esta hija fuese la persona que en gran medida aportase al sostenimiento de su madre, sí pone en evidencia las contradicciones en las que incurrieron la demandante y sus testigos, lo que le resta total credibilidad a sus dichos, con los cuales se pretendió hacer ver que la demandante solo dependía económicamente de su hija Daniela, a sabiendas que también tenía otra hija de nombre María Alejandra, divorciada, sin hijos, y con ingresos fijos producto del ejercicio de una profesión universitaria (Ingeniera Civil) para el mes de julio de 2019.

En sentir de la Sala, valorada en su conjunto la totalidad de la prueba arribada a las diligencias se encontró que la aquí demandante no cumplió con su carga de probar la dependencia económica de su hija Daniela Vélez Ruiz al momento de su muerte, que permitiera evidenciar un sometimiento o sujeción

de la señora AURA PATRICIA RUÍZ POSADA al auxilio recibido de su hija fallecida, de tal manera que, no obtenerlo, ponía en peligro su congrua subsistencia, motivos por los cuales SE CONFIRMARÁ la sentencia venida en apelación por encontrarse ajusta a la realidad fáctica y probatoria de la litis.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la desventura del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandante, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de la demandante y a favor de la AFP accionada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$300.000.

#### **VIII. – DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** íntegramente la sentencia objeto de apelación de fecha 28 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, según lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la afp demandada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$300.000.

**TERCERO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**CUARTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**  
Magistrada